

Discursos y acciones en torno a la batalla cultural

Cambios y continuidades de la derecha en una frontera geopolítica de Estados Unidos y México (1950-2024)

Areli Veloz Contreras

■ Doi: 10.54871/ca26cs05

Introducción

En Occidente, desde mediados del siglo XX, tras las movilizaciones por el reconocimiento de las diferencias culturales, distintos grupos conservadores se manifestaron contra las políticas identitarias. Por eso, los movimientos feministas, de la diversidad sexogenérica, los movimientos contra el racismo y los ecologistas se convirtieron en algunos de los principales “enemigos” de la nueva derecha en distintos países de Europa y de América Latina, así como en Estados Unidos, ya que consideraban que esas visiones de la humanidad se estaban convirtiendo en un tipo de totalitarismo al cual se debía combatir.

Así, la confrontación entre los diversos movimientos sociales que reclamaban el reconocimiento de las identidades y los movimientos conservadores que defendían los valores tradicionales de

las naciones democráticas se plantearon en lo que Hunter denominó *culture wars*, una guerra que aglutinaba temas como el aborto, la diversidad sexual, el secularismo, las migraciones, y la utilización de drogas para uso recreativo, entre otros (Castle y Stepp, 2021). De esa forma, las guerras culturales se emprendieron en contra de las agendas cosmopolitas que apostaban por políticas de equidad e inclusión de identidades diversas (Brown, 2021, p. 24).

En el caso de las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México, por ejemplo, los discursos antagónicos con respecto a las diferencias culturales estuvieron presentes en las relaciones binacionales entre estos países. Destaca la lógica económica que, durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzó a operar en ciudades como Tijuana y Mexicali, Baja California. El contacto de uno y otro lado de la frontera ha generado tensiones binacionales, de orden moral, justificadas bajo una retórica localista, articulada al nacionalismo y al resguardo de sus fronteras.

Cabe señalar que, en este contexto, ya se encontraba consolidada una clase empresarial tradicional en la región, la cual se asociaba al Partido Acción Nacional [PAN] (1939), el cual se convirtió, como en otros estados de México, en un espacio importante para la militancia católica en la política partidista (Hernández, 2019, p. 3). El PAN mantenía una postura crítica hacia el discurso nacionalista posrevolucionario, concretamente a los temas relacionados con la educación laica y la economía liberal (lo cual se redefinió en la época neoliberal), lo que, a su vez, delineaba su visión sobre la propiedad privada y la familia, aspectos centrales en las posturas de oposición al partido dominante de mediados del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional [PRI] (1929).

Así, en la localidad se va configurando una polarización política que se basa en una confrontación moral sustentada en los principios conservadores de la Iglesia católica y en la conformación de una derecha política en el plano local, asociada al PAN. Moral que ha sido resguardada por una élite empresarial, católica e intelectual que, además, tuvo una influencia significativa en la opinión

pública sobre diversos temas, como el aborto y la diversidad sexual, lo cual, años después se redefinió con la presencia de los neopentecostales, tema que rebasa el objetivo aquí propuesto. Por ello, este capítulo sostiene que, si la familia nuclear y heterosexual –con la mujer como su pilar– era considerada por la élite económica y política como uno de sus principales referentes de disputa, entonces el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados, simbólicamente, se convirtieron en un campo privilegiado en la batalla cultural que se estaba produciendo en la frontera norte de México, y continúa siendo un referente que la caracteriza.

Así pues, la batalla cultural que se ha intensificado en los últimos años en la frontera tiene sus raíces en conflictos históricos que han moldeado la cultura de estos territorios, lo cual influye en los discursos, prácticas y acciones de la derecha actual. Simbólicamente, en dicha batalla, lo femenino se convierte en una parte central de alteridad y homogeneidad nacional. De ahí que nos interesa articular a la derecha con la nación a través de la familia, centrándonos en el caso del aborto y la sexualidad.

Ahora bien, el tema del nacionalismo es amplio, pero, para los fines de este capítulo, se parte de que la nación moderna, como comunidad imaginada (Anderson, 2008), se sustenta en clasificaciones de valor diferencial que marcan fronteras en relación a la raza, el género, la clase y la sexualidad como aquellas que, en intersección, van definiendo la percepción y concepción colectiva de una historia de la humanidad, así como de la historia que marca lo común y la diferencia (Balibar, 2018, p. 87). En este sentido, la nación y el Estado requieren de instituciones que permitan una reproducción de ese sistema de ordenamiento social, como es la familia, así como las mujeres y los cuerpos feminizados a quienes se les atribuye el papel de reproductoras y guardianas, tanto de los individuos de la nación como del orden moral que los identifica como tales (Yuval-Davis, 2004).

Para desarrollar el argumento propuesto en este capítulo se recupera información del archivo hemerográfico de Tijuana y

Mexicali, entre las décadas de 1960 y 1980 que, siguiendo el planteamiento de Stoler, se retoma como proceso y no como objeto, en el cual se muestran discursos que manifiestan el poder a través de enunciaciones que se reproducen y legitiman por medio de diversos proyectos, como puede ser el de la nación (Stoler, 2010). Tengo presente que, como menciona Pérez, el control de los medios, como la prensa, concretamente entre 1960 y 1970, fueron centrales para difundir un determinado código moral, por medio de la imposición de la censura y la monopolización de los medios (2011, p. 83). De ahí que el archivo hemerográfico se retome como manifestación de poder. Asimismo, se recurre a las notas de trabajo etnográfico que se tomaron entre 2016 y 2024, el cual se centró en las movilizaciones de las organizaciones civiles que se nombran a sí mismas como nuevas derechas y que, además, tienen una larga trayectoria de activismo católico y cercanía política con el PAN y, en los últimos años, con el Partido Encuentro Social [PES].

Cabe señalar que Baja California, en los últimos años, se caracteriza por un pluralismo religioso (Jaimes y Montalvo, 2019), por lo que otras iglesias –como las evangélicas– han influido en la opinión pública sobre temas como el aborto y la sexualidad. Aun así, dentro de la élite empresarial y política de Tijuana, el catolicismo conservador sigue siendo una fuerza predominante. Por ello, este texto se centra en las estrategias que dicha élite emplea a nivel local para fortalecer su presencia política, así como en los discursos que, en distintos momentos, han sido utilizados y redefinidos para justificar su postura frente a determinados movimientos sociales. La información aquí presentada busca aportar a la comprensión de un nuevo giro político que, entre otras cosas, se basa en la noción de batalla o guerra cultural. No obstante, se reconoce que esta interpretación es parcial y no pretende ofrecer garantías más allá de su enfoque científico.

Políticas de moralización en la frontera

En la década de 1950, en las principales ciudades de Baja California, comenzaron a manifestarse inconformidades respecto a la mala imagen que se estaba produciendo en torno estas ciudades, tanto nacional como internacionalmente, concretamente en Estados Unidos. En el caso de las clases medias empresariales e intelectuales de Tijuana y Mexicali, se comenzó a difundir un discurso donde se reprochaba que estas poblaciones fueran asociadas a la prostitución, al alcoholismo, al consumo de estupefacientes, y se les relacionara con los juegos de azar, el aborto y las llamadas “raspas” (legrado uterino). Esta mala imagen, se decía en los periódicos de la época, iba en detrimento de la economía de la región y, por ende, de las familias bajacalifornianas quienes, además, conservaban tradiciones que no compaginaban con los cambios sociales que se estaban generando en otras latitudes del mundo, como en Cuba (por comunistas), pero también en Estados Unidos por el surgimiento de movimientos sociales, como el feminista y el de las diversidades sexuales. Asimismo, la llegada de migrantes del sur del México, quienes eran vistos como una amenaza al resguardo de la buena moral de estas ciudades fronterizas, se consideraba que iba en detrimento del trabajo arduo de los “verdaderos pobladores” del territorio (Veloz, 2019).

Mientras tanto, en California, Estados Unidos, también se conformaron grupos que defendían la buena moral de su respectiva población. En los diarios locales de San Diego, por ejemplo, se llegó a plantear que el problema del aborto o del consumo de drogas y alcohol se debía a que la frontera mexicana no contaba con las políticas ni las restricciones necesarias para el cuidado de los ciudadanos estadounidenses, quienes se veían en peligro al desplazarse hacia México. Además, la migración de mexicanos que cruzaban la frontera era considerada una amenaza para la población estadounidense, lo cual se atribuía a la poca vigilancia de las garitas y

al peligro que corrían sus poblaciones con la llegada ilegal de los latinos a las ciudades del sur de Estados Unidos.

Así, como se ha indicado en otros trabajos (Veloz, 2017, 2019), en las ciudades fronterizas se fueron constituyendo grupos que, como se dijo, pertenecían a una élite empresarial e intelectual, vinculada a la Iglesia católica conservadora, que fungieron como los “guardianes de la frontera”. En el caso de México, por ejemplo, dicha élite era aquella que, a través de distintos medios, asumía el compromiso de defender a la población bajacaliforniana ante el asecho de los movimientos sociales que se daban en California y en el centro de México, como el feminista, por lo que se proclamaban a favor de una moral que resaltara el trabajo, la castidad y la virtud de sus mujeres, así como de las familias que forjaron a las naciones y a sus respectivas poblaciones. Ejemplo de ello es el texto que Julieta Cuevas, una intelectual bajacaliforniana, redactó en el periódico *El Herald*o:

[...] cientos de mujeres en Estados Unidos de Norteamérica se han congregado para reclamar sus derechos, que ellas suponen menoscabados por culpa de la organización social contemporánea. Así, han integrado una asociación que lleva por nombre Poder Femenino, con la cual se da a entender el propósito belicoso que las anima. Igual que el poder negro o que el poder juvenil, el poder femenino se dispone a arremeter contra el mundo actual [...] las componentes del Poder Femenino se refieren a la libertad sexual y pretenden la equiparación completa del hombre y la mujer en este punto. Parten, a mi juicio, de un hecho que habría que demostrar, que el hombre posee realmente esa libertad (sexual) sin límites. Las integrantes del Poder Femenino se han dejado encandilar por ciertos desafueros propios del género masculino y piden que se les permita cometer desafueros semejantes. Se han olvidado de una institución básica, la familia. Si se instaure esa libertad la familia caerá y la civilización también se disgregaría. La cultura experimentaría un golpe muy duro porque la familia es la encargada de transmitir a los hijos las ideas, las

tradiciones, el lenguaje; es la encargada de transmitir todo. (Cuevas, 21 de julio de 1961)

Las mujeres y los cuerpos feminizados y racializados se fueron convirtiendo en territorios de disputa en la batalla cultural, ya que en ellos se reproducían, además de otros humanos, los discursos que forjaron los proyectos nacionales, pero distinguiéndose y diferenciándose desde la cercanía. En el caso de la frontera, por ejemplo, como se mostró en la cita anterior, se manifestaron la tensión entre ordenamientos simbólicos distintos que marcaban los discursos y las dinámicas, muchas veces contradictorias, de las diferencias depositadas en el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, así como en el cuerpo social que distinguía a las naciones. Así, el Poder Femenino que se asoció a los movimientos que surgían en California manifestaba un peligro para las familias mexicanas y, concretamente, para las mujeres que se consideraron reproductoras de la nación. Pero, como diversas feministas manifestaron en su momento, diversos grupos conservadores en Estados Unidos entendieron el feminismo como un peligro para las familias norteamericanas.

Sin embargo, en la contienda cultural que se gestaba en las fronteras nacionales, las mujeres adquirieron una doble lectura, como menciona Yuval-Davis (2003), ya que, por un lado, podían simbolizar el honor y la pureza dentro de sus respectivas colectividades, por lo cual tenían un papel central en los proyectos nacionales y étnicos. Pero, por otro lado, eran vistas como una otredad y, por tanto, estaban excluidas de la organización social, política y económica de un determinado grupo social.

En este sentido, en la batalla cultural que se desarrolló en las ciudades fronterizas, la simbolización de los cuerpos de las mujeres se manifestó a través del caso de los abortos que se suscitaron en Tijuana y Mexicali en las décadas de 1960 y 1970, convirtiéndose en un problema político de los dos lados de la frontera. El debate sobre el aborto tuvo lugar en un momento político clave en el que la opinión pública se convirtió en un campo central para consolidar

las posturas de la élite empresarial y católica –que incursionaba en el partidismo político– y quienes buscaron posicionarse públicamente como los guardianes de la moral familiar y, en consecuencia, de la estabilidad regional. Esta estrategia operaba en contextos locales específicos, como las ciudades fronterizas, ya que se consideraron espacios especialmente sensibles a los cambios sociales y culturales que se producían en ambos lados de la frontera.

En este escenario, las élites políticas fronterizas se fortalecieron al adoptar posturas contrarias a los movimientos sociales que promovían el reconocimiento de la diversidad cultural e identitaria a quienes, además, se les tachaba de comunistas. A través de discursos y políticas orientadas a la defensa de la familia nuclear, estas élites no solo consolidaron su influencia, sino que también impulsaron medidas visibles y directas para proteger a dicha institución social, lo cual se fortaleció bajo la consolidación del PAN en el estado. Así, su interés por preservar el orden moral y la imagen de las ciudades fronterizas se tradujo en políticas diseñadas para salvaguardar tanto la familia tradicional como la percepción pública de estos territorios.

Posteriormente, en la década de 1960, en los diarios locales se planteó la necesidad de crear las campañas morales o campañas de moralización (Veloz, 2019), las cuales tenían el objetivo de proteger a las familias y, por ende, a una colectividad, ya no solo nacional sino regional, frente a los movimientos feministas, ya que estaban redefiniendo la organización social y, por ende, los roles entre hombres y mujeres, así como de las juventudes. Cabe señalar que, como en otros lugares del país, estas campañas eran impulsadas por la Iglesia católica conservadora, por figuras intelectuales con influencia pública y por representantes del sector empresarial, quienes plantearon la necesidad de limpiar el nombre de las ciudades con la intensión de generar su prosperidad social y económica. Así, empresarios, intelectuales, católicos conservadores y políticos del PAN coincidieron en diseñar programas y difundir discursos dirigidos a reforzar virtudes sociales que se desprendieran de un

código moral dirigido a normar hábitos y creencias en torno a lo “moralmente permitido” (Pérez, 2011, p. 82). El caso de los abortos fue de los temas más emblemáticos en Tijuana y Mexicali, donde se acusaba a mujeres estadounidenses de ingresar a México para practicarse un aborto. Como se mencionó en *El Heraldo*:

[...] Tijuana ha sido señalada como un lugar en que con facilidad, la liviandad de numerosas mujeres del vecino país, encuentran a profesionistas que se hagan cargo de practicarles operaciones ilegales que pasan desapercibidas para el público [...] pero en distintos casos estas intervenciones médicas quedan al descubierto como consecuencia de factores previstos por quienes solicitan provocación de un aborto para evitar el advenimiento de un ser que pudo ser fruto de relaciones ilícitas que se tratan de ocultar; de conductas pecaminosas de dos irresponsables. (*El Heraldo*, 5 de mayo de 1962)

El discurso sobre el aborto, que se convirtió en un asunto público y mediático en las ciudades fronterizas tanto del lado mexicano como del estadounidense, manifestaba una posición política con respeto a una práctica que, en otros países, se estaba legalizando por medio de leyes y reglamentos estatales. Entre los primeros países que reconocieron el aborto como un derecho de las mujeres estuvo Rusia en 1920, y posteriormente Cuba en 1965; Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte sobre el caso *Roe vs Wade*. Si bien en distintos países, como México, la legalización del aborto ocurrió recién en 2007, cuando se despenalizó solo en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), su demanda ha sido central tanto para los feminismos como para el activismo católico y empresarial conservador. Ya en 1936, en la Convención de Unificación del Código Penal, dedicada a tratar los ordenamientos de la federación frente a las entidades federativas, se había presentado una conferencia sobre el aborto y sus causas sociales y económicas (Lamas, 2009).

El aborto y su asociación con el feminismo se convirtió en uno de los problemas o amenazas más desafiantes para la élite política

aquí analizada, cuyos integrantes, como se ha mencionado, crearon estrategias que respondían a problemáticas locales, pero articuladas a los virajes que el ala progresista y/o de izquierda estaba adoptando en el plano internacional desde la segunda mitad del siglo XX, como ocurrió con las políticas sobre el reconocimiento identitario que diversos grupos demandaban y que se plasmaron en leyes y reformas, como pasó con la despenalización del aborto. Por lo tanto, las acusaciones y el desprestigio que la élite política conservadora llevó a cabo contra los feminismos, como a las mujeres que se vinculaban al aborto, se hacían públicos, por medio de casos que se mediatizaban. En los diarios locales, estos casos solían mostrarse de manera negativa, al mismo tiempo que se echaba mano de los discursos antifeministas para enarbolar tanto a una facción política, como a los grupos o personas que se relacionaban con ella, y que se presentaban como los garantes o salvadoras de las familias de la nación y, por ende, de aquellas que representaban a sus respectivas localidades.

Así, por ejemplo, en el diario local más emblemático del estado, el *Heraldo*, además de acusar a las mujeres estadounidenses por practicarse abortos en las ciudades fronterizas de México, también se culpaba a las mujeres de clases populares por llevar a cabo dicha práctica. Sírvese de ejemplo el caso de la Sra. Nevárez Pérez, una mujer que fue consignada por la Comandancia Policial, a quien se le imputó practicar “la partería” y haber provocado la muerte de una mujer tijuanaense, de 22 años, e hija de un servidor público (Veloz, 2019). Además de “haber convertido el patio de su casa en un cementerio clandestino donde enterraba los fetos que había provocado a algunas mujeres livianas y faltas de responsabilidad” (*El Herald*o, 7 de enero de 1954).

Años después de que la derecha presentara al aborto como una práctica nociva e inmoral para la población del estado y que se convirtiera en un tema que servía de plataforma política para el PAN, la diversidad sexual también se retomó como una práctica perjudicial para las familias del estado y se convirtió, asimismo, en un

tema más para la agenda política de la derecha. De la misma manera que pasó con el aborto, los problemas asociados con las diversidades sexuales no eran algo que la élite empresarial y católica local percibiera como propio de las familias bajacalifornianas, sino que lo presentaban como un mal que venía del exterior, al mismo tiempo en que afirmaban que existía una población vulnerable – los pobres, extranjeros o migrantes– que estaba propensa a llevarlo a la práctica. Por ello, desde mediados de la década de 1970, en el diario local *El Herald* se publicaba que la homosexualidad o el transformismo (de hombre a mujer) eran prácticas en contra de la naturaleza humana, las cuales se estaban permitiendo en California, Estados Unidos, lo cual dejaba ver la crisis que la humanidad estaba experimentando. En junio de 1972, se hizo pública la nota sobre la posición del Vaticano con respecto a la homosexualidad y el cambio de sexo:

El papa Paulo Sexto apeló a los cirujanos del mundo para que defendieran la moral y la integridad de la vida humana contra la diseminación del “hedonismo permisivo”, el pontífice dijo ante un consejo internacional de cirujanos que no se podrían mencionar aspectos específicos contra las intervenciones quirúrgicas fuera de la moral, como el cambio de sexo. Pidió a los médicos que le ayudaran contra la defensa, en medio de la difusión de las opiniones actuales, en relación a la homosexualidad y el cambio de sexo. (*El Herald*, 2 de junio de 1972)

Los discursos que pululaban en *El Herald* resaltaron cuatro aspectos que fueron estratégicamente empleados y difundidos por la élite local para describir y significar a los homosexuales, “los mujercitos” o “los transformistas”: a) la degeneración y depravación moral; b) la criminalidad, es decir, eran descritos como personas propensas a robar, engañar o violar; c) los asesinatos hacia los homosexuales, que se hicieron públicos por medio del diario local, eran atribuidos a su inmoralidad; y, d) el brote del VIH-SIDA, en la década de 1980, generó que la homosexualidad y, por ende, aquellas

personas que se asociaban con ella, se interpretaran como un riesgo de salud para las poblaciones.

Al igual que pasó con los movimientos feministas, el auge y la mayor visibilidad de las identidades sexogenéricas, tanto a nivel nacional como internacional, llevó a que la élite política, empresarial e intelectual de las ciudades fronterizas generara estrategias y medidas contra las prácticas consideradas ilícitas y dañinas para la población, así como un mayor control y vigilancia de aquellas personas y espacios asociados con la homosexualidad. Entre las medidas que se propusieron estuvo la creación de las llamadas campañas de moralización, aspecto que, como se ha indicado en otros trabajos (Pérez, 2011; García, 2011; Gómez, 2019; Veloz, 2019), sentaba las bases de todo un discurso político que salvaguardaba a instituciones como la familia nuclear y, al mismo tiempo, a “los verdaderos” habitantes del territorio fronterizo, quienes eran vistos como propensos ante la crisis que atravesaba la humanidad, la cual se relacionaba, entre otras cosas, con las demandas y los avances que los movimientos sociales estaban ganando en el terreno político.

Así pues, los emblemas políticos de la derecha en las ciudades fronterizas se presentaban desde sus propias particularidades y con su propia agenda política, pero se aunaban a intereses más amplios que, a nivel internacional, se iban tejiendo contra una nueva imagen que la izquierda iba adoptando. En este sentido, así como existió una relación entre los movimientos sociales, tanto feministas como de la diversidad sexual, entre California y Baja California, también se gestaban relaciones binacionales entre grupos, ya fueran laicos o de diversas religiones, en pro de la defensa de sus respectivas poblaciones, siendo la familia la institución que les permitía amalgamar sus demandas y defensas políticas, al mismo tiempo que continuaba operando como catalizador de una derecha actualizada.

Estrategias y políticas distintivas de la derecha en Baja California

Como se mencionó en el apartado anterior, la conformación de la derecha en Baja California estuvo marcada por su estrecho vínculo con la Iglesia católica conservadora, el sector empresarial regional y los intelectuales de clase media, así como por su participación, afiliación o simpatía con el PAN. Estos actores se posicionaron abiertamente en contra del discurso nacionalista posrevolucionario y llevaron a cabo diversas acciones para influir socialmente, entre ellas la implementación de campañas en defensa de la moral de la población bajacaliforniana y el control de la opinión pública a través de la monopolización de medios de comunicación locales. Por ello, no fue casual que los discursos en defensa de la nación y su respectiva población se enmarcaran en la idea de una supuesta crisis de la humanidad, atribuida al avance de los feminismos y los movimientos de diversidad sexogenérica, entre otros.

Entrado en siglo XXI, las movilizaciones contra el aborto y las diversidades sexuales se hicieron más evidentes en distintas entidades de la República Mexicana. Sin embargo, fue a través del debate y los conflictos suscitados por casos concretos que el tema del aborto se fue instalando en la agenda pública y política tanto a nivel federal como local-estatal, lo cual se articuló a la histórica demanda de los diversos movimientos que reclamaban derechos sexuales y reproductivos.

En este texto se resaltan dos casos que fueron emblemáticos en el estado de Baja California, y que son útiles para comprender el nuevo rumbo político de la actual derecha en esta frontera, la cual no dista de otros casos que se suscitaron en otras ciudades de México, como también en Estados Unidos. Por un lado, están las redadas policiacas que se dieron en los bares *gays* de Mexicali y Tijuana, lo que provocó, entre otras cosas, que la noticia posicionara a las ciudades como lugares hostiles y reticentes contra los

derechos sexuales, lo cual iba en contrasentido a las políticas identitarias adoptadas en otras latitudes geopolíticas, concretamente en el estado vecino, California, Estados Unidos. Por otro lado, está el caso Paulina, un referente político tanto en el estado como en el nivel nacional y binacional, ya que posicionó el tema del aborto en la agenda política en el nivel federal, además de que intervinieron distintas organizaciones e instancias internacionales en torno a derechos humanos y, concretamente, de las mujeres. Caso que también hizo evidente la intervención de la Iglesia católica en las decisiones políticas que los funcionarios públicos (en este caso del PAN) tomaron en torno a temas como el aborto y la sexualidad.

Cabe señalar que la nueva derecha en Baja California se caracteriza también por la mayor presencia de la iglesia evangélica en Tijuana y su influencia en la política partidista. Si bien el tema rebasa lo aquí expuesto, es importante mencionar que su auge se debe a factores, como la migración de sus representantes ideológicos con la misión de evangelizar a las poblaciones; el crecimiento demográfico de la ciudad que se da entre 1970 y 1990; el pluralismo religioso que caracterizó a Tijuana a finales del siglo XX y una mayor presencia en las clases populares de la ciudad (Jaimes y Montalvo, 2019). Además, se ha aliado a la Iglesia católica conservadora de la ciudad tanto por su influencia en su gran número de feligreses como también por la coincidencia en los códigos morales de la feminidad y la sexualidad que comparten, evidenciándose en sus acciones políticas y la pluralidad de la derecha política que actualmente se observan en la ciudad.

En el caso de las redadas en los bares *gay* de la ciudad de Tijuana, en noviembre de 1991 se justificó la detención de los “mujerечitos y los homosexuales” como parte de las campañas de moralización (*El Mexicano*, 11 de diciembre de 1991). Campañas que, como se mencionó en el apartado anterior, devenían de códigos morales impulsados por una élite política y económica local, vinculada con la Iglesia católica y, en menor medida, evangélica. Campañas que tuvieron el objetivo de limpiar la imagen de las ciudades y, al mismo

tiempo, continuar con un trabajo de cuidado de la integridad de las familias bajacalifornianas, ya no solo ante la inmoralidad con la cual se representaba todo aquello relacionado con la diversidad sexual, sino también por su asociación con el VIH, lo cual endureció las formas de control, vigilancia y violencia, concretamente en aquellas zonas asociadas a la población, nombrada en los medios de ese momento, como homosexual.

Desde la década de 1970, las redadas se hicieron cada vez más frecuentes en la zona centro de las ciudades de Mexicali y Tijuana. El objetivo de las redadas era implementar la vigilancia contra una población asociada con la depravación sexual y, por ende, con enfermedades psicológicas y sexuales. Sin embargo, a medida que los movimientos por los derechos sexuales e identitarios iban cambiando, la percepción sobre lo relacionado con las identidades sexogenéricas, desde la derecha, se redefinió por medio de estrategias que actualizaron sus mismos preceptos: la defensa de la familia nuclear, la propiedad privada y la moral de la ciudad.

En el caso de México, los diversos movimientos de las diversidades sexuales surgieron, abiertamente, en las décadas de 1970 y 1980, y se adhirieron a partidos políticos de izquierda (Dehesa, 2007). Además, sus demandas se articularon y justificaron por medio de los derechos humanos universales y también por democracias que posicionaron a las identidades como un referente central de las políticas de los estados. No obstante, mientras se ampliaban los derechos y las demandas en torno a la diversidad sexogenérica, también se acrecentaban y manifestaban discursos en contra, como fue con la derecha de Baja California, la cual se distinguía por una fuerte presencia de la Iglesia católica y por el partidismo político, por medio del PAN (Hernández, 2011, p. 122).

De esa manera, las redadas en las zonas asociadas con los grupos de la diversidad sexogenérica fueron una estrategia que surgió de los comités de ciudadanos, tanto laicos como católicos, en su mayoría integrados por intelectuales o familias con presencia y prestigio social en las ciudades, y que se justificaron para salvaguardar

a las familias de la región. En el caso de Tijuana, por ejemplo, bares como “el Ranchero” o “los Equipales” se convirtieron no solo en espacios de recreación, sino también de convivencia y vinculación política, lo cual generó el descontento de diversos sectores, quienes se manifestaron contra estos espacios en la ciudad. Así, las campañas de moralización tenían el objetivo de vigilar las actividades que se llevaban a cabo en las zonas y privar de la libertad a todo aquel que “faltara a la moral” o que cometiera “depravación sexual” (Veloz, 2017). Al mismo tiempo, los diarios locales retomaban estos casos para afianzar un código moral a través de la opinión pública.

Cabe señalar que las zonas donde se llevaban a cabo las redadas, tanto en Tijuana como en Mexicali, estaban conectadas con la gartera internacional, es decir, eran la primera imagen de la ciudad para quienes ingresaban a ella provenientes de Estados Unidos. Por eso, la criminalización de “los diferentes”, como en este caso fueron los llamados “homosexuales” y “mujercitos”, respondía al control por los espacios de la ciudad, como la frontera, y por la movilidad, o su restricción, por ella (Veloz, 2017).

No obstante, el 30 de noviembre de 1991, un grupo de *gays*, como se autonombraron política y públicamente por primera vez, se manifestó contra las redadas que el cuerpo policiaco de las ciudades llevaba a cabo en los bares *gays*. Entre los personajes más emblemáticos se encontraba el activista Max Mejía, quien fue uno de los primeros representantes de los grupos de la diversidad sexogenérica de la ciudad de Tijuana y quien creó un “comité contra las redadas”, con la intención de denunciar la violencia y el hostigamiento que constantemente recibían (Veloz, 2017).

La fricción política se redefinió años después, ya que el PAN gana las elecciones en Baja California (1993), siendo el primer estado de México que derrota al PRI (con más de 70 años en el poder) y, en el 2000, logra ganar en el nivel nacional. El triunfo, como menciona Hernández (2019, p. 9), manifiesta el nuevo viraje de la derecha, en este caso, en el plano local, caracterizado por impulsar la economía neoliberal, consolida la alianza con ciertos sectores del

PRI y facciones del partido de izquierda –el Partido Revolucionario Democrático [PRD]–, así como con otras iglesias con quienes comparten una moral conservadora en el plano social, concretamente con el tema de la familia.

Así pues, las redadas y los asesinatos de personas que se asumían abiertamente o, en su caso, eran sospechosas de ser homosexuales generaron confrontaciones que, si bien se manifestaron en campañas políticas, las cuales no eran nuevas, sí exacerbaban temas, como el caso de las diversidades sexuales, convirtiéndose en algo partidista que enarbolaba, de nuevo, la defensa de la familia heterosexual como un referente central, ya no solo de comités o grupos ciudadanos, sino de partidos políticos con presencia en el estado: el Partido Acción Nacional [PAN] y, años después, el Partido Encuentro Social [PES].

Partidos políticos salvando a las familias de la región

Por más de 50 años, el Partido Acción Nacional [PAN] constituyó la oposición política en México frente al Partido Revolucionario Institucional [PRI], un partido de tendencia centroizquierda que data de la revolución mexicana, y el cual estuvo al frente del gobierno desde 1929 hasta el 2000. Sin embargo, en 1989 el PAN ya había ganado las elecciones estatales, gobernando por primera vez en Baja California. El triunfo de dicho partido en el estado propició, como menciona Hernández, que una élite política y empresarial se posicionara desde el plano regional, y no solo federal, al mismo tiempo que se presentaban desde un perfil conservador o ultraconservador, “producto de espacios socioculturales donde se formaron líderes vinculados a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil que también se asumían desde dicho perfil” (2021, p. 25).

En Baja California, el PAN defendía abiertamente los valores en torno a la familia nuclear y heterosexual, así como la propiedad

privada, y se vinculaban a la Iglesia católica, como se dijo. De esa manera, la élite económica, política e intelectual que se posicionaba como la garante de la buena moral de las ciudades fronterizas estaba influenciada por la jerarquía de la Iglesia católica y, por ende, por la moral cristiana conservadora. En este sentido, el primer gobierno de ese partido conservador propició que los valores en defensa de la familia, la nación y la región se convirtieran en parte medular de los emblemas y agendas políticas de dicho partido. Así, la derecha mexicana que se consolidó en el estado desde mediados del siglo XX antecedió, como dice Hernández (2021), a los movimientos de base católica, de vertientes ultraconservadoras, como los sinarquistas, que llegaron a la península de Baja California desde principios de la década de 1940, así como a las organizaciones civiles de clase media conservadora, las organizaciones de laicos y grupos transnacionales que se vincularon a los principios que el PAN cobijaba, como los grupos provida.

El PAN abrazaba e impulsaba aquello que la élite de la clase media e intelectual estuvo propiciando y, estratégicamente, ideando desde mediados del siglo XX: las campañas de moralización en defensa de la familia nuclear y, ya no solo de la nación, sino de la región, es decir, de los habitantes –y no migrantes del sur del país– de las ciudades del estado (Veloz, 2014). Así que los valores en torno a la defensa de la familia que dicho partido impulsó articulaban a distintos actores, como la Iglesia católica y las asociaciones civiles tanto nacionales como internacionales, lo cual, por ejemplo, se pudo ver con el caso Paulina, el cual generó cambios legales con relación al tema del aborto en el plano nacional y también redefinió las estrategias políticas de la derecha.

En 1999, una niña que vivía en una colonia popular de la ciudad de Mexicali fue violada en su propio hogar. La madre acudió al Ministerio Público cuando se enteró que Paulina, a sus 13 años, había quedado embarazada y en dicha instancia le autorizaron el aborto. Sin embargo, cuando acudieron al Hospital General de la ciudad, bajo distintas trabas administrativas, se negaron a llevar a cabo

dicho procedimiento. Además, el caso también se hizo público debido a que se inmiscuyeron distintos personajes políticos, por ejemplo, el director del hospital, quien justificó su posición contra el aborto al afirmar que Paulina podría morir en la intervención; el procurador de justicia, por su parte, la llevó a ella y a su madre con un sacerdote católico para que las convenciera de no continuar con el aborto y también algunas mujeres, integrantes del grupo Provida, acudieron al hospital para mostrarle a Paulina, con autorización de la institución, un video contra el aborto: “El grito silencioso” (Ubaldi, 2006).

El caso Paulina no solo refería a los obstáculos administrativos que, a una niña, en compañía de su madre, le impidieron interrumpir su embarazo, concretamente desde las condiciones en que este se generó, sino que también manifestaba que era un tema político y de debate público en un país laico. Además, se evidenció la articulación de distintos actores, como el estado, la Iglesia católica y las asociaciones civiles, tanto locales como internacionales, para, estratégicamente echar atrás o impedir la creación de cualquier tipo de ley que abriera la puerta a la despenalización del aborto.

En 2002, dos asociaciones feministas, Alaíde Foppa y Epikieia, así como el Centro de los Derechos Reproductivos de Estados Unidos representaron a Paulina haciendo una denuncia del caso ante la Comisión de Derechos Humanos. Dicha queja se interpuso por los agravios que sufrió Paulina. Después de cuatro años, el gobierno de Baja California publicó un desplegado donde se admitió la negligencia y violación a los derechos de Paulina (Ubaldi, 2006). En el plano nacional, el caso generó que se llevaran a cabo reformas y leyes en torno a la despenalización del aborto, concretamente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, convirtiéndose también en un antecedente de la despenalización del aborto que se dio en 2007 en dicha ciudad.

Por otro lado, dos años después del triunfo del PAN en Baja California, en 2006, nació un nuevo partido ultraconservador, el Partido Encuentro Social [PES], el cual, más allá de solo representar a una facción de la ciudadanía, abrazaba abiertamente los principios

morales que devenían de la Iglesia evangélica. Dicho partido se creó y estuvo a cargo, en sus inicios, por funcionarios y/o simpatizantes evangélicos, así como por otros funcionarios que, años atrás, habían sido parte del PRI. Si bien el PES tenía fuertes vínculos con el PAN, su postura y su vinculación con la Iglesia evangélica marcaba una diferencia entre estos.

En sus inicios, en Baja California el PES se denominaba a sí mismo como el *Partido de la Familia* y entre sus lemas estaban: “*Di sí a la vida: defiende el futuro de nuestras familias*” y “*Di sí a la vida. Porque queremos una vida Digna*”. Entre las metas del partido se encontraba evaluar las políticas que se habían llevado a cabo en los últimos 50 años, a nivel estatal y federal, ya que, decían, iban en detrimento del género humano. En este sentido, el PES se posicionó abiertamente contra los movimientos feministas y de las diversidades sexuales, dado que, para este partido, iban contra la naturaleza humana y su dignidad (Veloz, 2014).

En 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal (ahora CDMX), lo cual provocó que, a nivel estatal, en las constituciones de las entidades federativas, se hicieran reformas en los códigos penales y civiles para reconocer la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Baja California estuvo entre los primeros estados que dieron personalidad jurídica al cigoto; la decisión política se hizo a puerta cerrada y participaron distintas representaciones políticas de la bancada del PAN y el PES, principalmente. Asimismo, fue un momento coyuntural para el accionar político de dichos partidos, ya que no solo se vincularon en un sentido partidista, sino también religioso, debido a que sus integrantes católicos y evangélicos se posicionaron y participaron abiertamente a favor de las disposiciones legales que se tomaron desde el gobierno estatal contra el aborto.

Los cambios al Código Penal con respecto al tema del aborto propiciaron una mayor vigilancia y criminalización de las mujeres que decidían practicarse ese procedimiento. Por ejemplo, en 2010 se hizo público el caso de Lesly, una mujer de 20 años que interrumpió

su embarazo. Distintas noticias y versiones surgieron sobre Lesly, pero coincidieron en que acudió al Hospital General de Mexicali, donde las enfermeras reportaron que se había provocado un aborto. Desde el Ministerio Público se la sentenció a 23 años de prisión por homicidio debido al parentesco. Al igual que el caso Paulina, distintas instancias y organizaciones feministas y de los Derechos Humanos hicieron público el caso y, posteriormente, desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado la mujer fue liberada en 2011 (Maier, 2010).

La influencia de la religión en los asuntos políticos también se debe, entre otras cosas, a las reformas constitucionales, como la de 2013 que, en el artículo 24, incluye la libertad religiosa como un derecho humano. Esta premisa caracterizaría la presencia de la Iglesia en la agenda política de una derecha diversa con mayor presencia en el escenario público, por medio, por ejemplo, de la organización civil que dio paso a la creación de diversas organizaciones que tenían como objetivo manifestar su derecho a la libertad de credo (Vivencio, 2019, p. 11).

Así, en los últimos años, el PAN y el PES, junto con organizaciones civiles y religiosas, tanto evangélicas como católicas han tenido una fuerte presencia en la defensa de la vida desde la concepción, así como la heterosexualidad y, lo que nombran, la naturaleza humana de los hombres y las mujeres. La familia se ha convertido en su principal campo de disputa y es a través de esta institución que fortifican su carácter político y religioso, por medio del reforzamiento de sus facciones.

La batalla cultural como adoctrinamiento

El PAN y el PES, en alianza con las Iglesias católica y evangélica, así como con distintas organizaciones civiles, tanto religiosas como laicas, empresarios locales y escuelas privadas han creado, históricamente, distintas estrategias para reforzar y difundir sus

preceptos morales en un contexto de cambios culturales sustantivos. La creación de las estrategias y los postulados que difunden no se realizan de manera aislada, sino que existe una amplia vinculación, en el plano transnacional, que se redefine y se fortalece según las particularidades locales, como se observa en Baja California.

Entre sus estrategias se encuentra, por un lado, mantener cautiva a una población que se asume conservadora; por ello, las localidades que históricamente han tenido una fuerte presencia conservadora se convierten en lugares centrales para desarrollar sus propuestas y estrategias y, también, para acrecentar los cuadros políticos de una derecha amplia. Por otro lado, las ideas y premisas que se difunden suelen redefinirse según los temas que se encuentran en las agendas políticas y públicas del momento; en este sentido es que los casos, como el de Paulina, el de Lesly, las redadas *gays* y otros son pivotes que desencadenan distintas opiniones públicas que suelen polarizarse de manera mediática y, al mismo tiempo, sirven para enganchar a distintos sectores en una de las discusiones, sean, o no, conservadores.

En los últimos años, las conferencias, seminarios, pláticas o conversatorios suelen ser una de las estrategias que mayor impacto han tenido en las ciudades fronterizas, ya que es por este medio que las Iglesias católica y evangélica, así como distintos funcionarios políticos, se mantienen vinculados, informados y actualizados con relación a los debates de orden moral que suelen estar mediatizados, como los casos de aborto y los cambios de la identidad sexogenérica. Además, son espacios que les permiten acrecentar sus cuadros políticos, difundiendo un sentido de “verdad” que justifica su batalla en el plano de las ideas.

Desde inicios del siglo XXI, distintas organizaciones evangélicas y católicas, en relación con asociaciones civiles, escuelas privadas y empresarios han organizado y gestionado diversos eventos que tienen el objetivo de informar, como consecuentemente lo hacen notar, sobre la crisis que atraviesa la humanidad en la actualidad. Por medio de invitaciones a distintos personajes mediáticos de

la nueva derecha, se hacen eventos abiertos para que la población acuda a escuchar e “informarse” de temas actuales. Por ejemplo, en 2006, asociaciones católicas organizaron el *V Congreso sobre Vida y Familia*, en la ciudad de Mexicali, en las instalaciones de una universidad privada del estado, conocida por formar a la élite económica, política y católica de la ciudad, el CETYS Universidad, un lugar donde se han realizado distintos eventos del ala conservadora. En dicho congreso, como menciona Balbuena (2014), se tocaron temas en relación con el aborto, el divorcio, la eutanasia y la homosexualidad. Además, se instruyó a los padres de familia para que fueran amorosos con la familia y disciplinaran a los y las hijas para que no incurrieran en estas prácticas que iban en detrimento de las familias.

En el caso del PES, por ejemplo, en 2009, una de sus militantes logró estar al frente del Instituto Estatal de las Mujeres [INMUJERES]. Por medio de la “Escuela de Valores” se llevaron a cabo varios cursos dirigidos a las poblaciones vulnerables; dicho programa se había implementado por iniciativa del Grupo Unidad Cristiana de México, que había participado con el gobierno en llevar estos talleres a las escuelas públicas de sectores populares y a los CERESOS, así como también a algunas maquiladoras de la ciudad. Los talleres tenían un doble propósito: reforzar la familia nuclear según los valores cristianos y fortalecer la vida en pareja, desde una visión biológica del cuerpo sexuado y la sexualidad (Veloz, 2014).

Sin embargo, desde el ala progresista se han manifestado contra las medidas impuestas a manera de política por el PAN y el PES. Por ejemplo, en 2009, la implementación de programas con tintes religiosos por parte del gobierno provocó una controversia pública y, por ende, denuncias por parte de distintas organizaciones feministas y de las diversidades sexuales de las ciudades de Mexicali y Tijuana, así como de la Comisión de los Derechos Humanos. En el caso del Instituto Nacional de las Mujeres [INMUJERES], la denuncia generó la destitución de la encargada de dicha instancia, ya que también incurría en la violación a la Constitución mexicana,

al no respetar el Estado laico. Sin embargo, esto no impidió que la organización de los eventos con tintes religiosos se continuara realizando.

Los avances políticos en torno al tema de la diversidad sexogenérica y la reproducción y sexualidad han sido sustanciales en los últimos años. Pero, a la par, también se ha evidenciado una fuerte movilización, fortalecimiento y acrecentamiento de la derecha en el plano local (nacional e internacional). Sus propuestas y estrategias pasan por el plano de las ideas, es decir, la batalla se da en la cultura, por ello, se redefine y actualiza el discurso y se difunde, estratégicamente, desde lo secular y religioso. En la ciudad de Mexicali, por ejemplo, tan solo de 2017 a 2024 –momento en que se realizó el trabajo de campo– se han realizado entre cuatro y diez eventos públicos por año, lo cual no se detuvo en los años de la pandemia por COVID-19.

A estos eventos se invita a distintos expositores que tienen presencia mediática en el plano internacional, entre los que se destacan: Agustín Laje, Nicolas Marque, Sara Winter, Pablo Muñoz y Carlos Ramírez, entre otros y otras exponentes. La organización suele estar a cargo de asociaciones civiles católicas y, en ocasiones, con apoyo de las evangélicas. También los sectores más conservadores de la Iglesia católica suelen apoyar y participar en estas actividades, así como las escuelas privadas y los padres de familia organizados. Cabe decir que, desde el 2012 cuando el PAN dejó de ser el partido que gobernaba a nivel federal y, concretamente, en 2018 bajo el partido de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) el apoyo de las instancias gubernamentales a los grupos conservadores ha sido ambiguo y fluctuante, según el momento y el tema que se encuentre en la agenda política. Este aspecto ha generado tensiones dentro de los propios grupos conservadores, ya que las facciones ultraconservadoras se han alejado de los partidos que históricamente se asumen de derecha y han manifestado la necesidad de crear un nuevo partido, lo cual se hizo público en la

Conferencia Política de Acción Conservadora [CPAC] en México, el 24 de agosto de 2024.

En este sentido, las alianzas entre partidos y funcionarios políticos, las Iglesias católica y evangélica, las escuelas privadas, los empresarios y las organizaciones civiles laicas y religiosas se han fortalecido en los últimos años en el plano local. Al mismo tiempo que existe una fractura entre ellas, lo cual se evidencia en el surgimiento de una veta ultraconservadora que pone los principios religiosos y “biológicos” como aquellos que, desde la batalla cultural, deben ser resguardados con la intención de salvar a la humanidad del contexto actual, el cual se percibe en crisis.

Conclusión

El objetivo de este capítulo fue mostrar cómo la derecha, que actualmente cobra fuerza en el plano internacional, ha tenido una presencia histórica en el plano local, a través de la vinculación entre la religión católica y, posteriormente, evangélica, así como con empresarios e intelectuales de la localidad. Esta presencia y vinculación les ha permitido a sus miembros acrecentar sus cuadros políticos y amalgamar sus demandas, reforzándose así de manera transnacional.

La frontera aparece como un espacio donde las tensiones culturales se exacerban debido a que distintos órdenes sociales están en cercanía y/o en contacto. Órdenes que, si bien se distinguen mediante diversos discursos y prácticas, también se refuerzan al coincidir en ciertos preceptos morales que, según el contexto, son percibidos en peligro, crisis o riesgo de la humanidad, como ocurre con los cambios políticos y religiosos que se generan en el plano internacional y que se aglutinan en temas como el aborto, las sexualidades y la identidad de género.

La frontera permitió situar los diversos discursos que, en diferentes momentos, marcan un nosotros/otros, lo cual va justificando

una retórica salvacionista que, constantemente, la derecha expone tras sus acciones. Esas acciones también se refuerzan o redirigen a través de casos concretos como ocurrió con las campañas de moralización, las cuales reforzaron las fronteras internas de eso que aquí se denomina como local, o con los casos de criminalización hacia quienes infringen el orden moral, el cual, además, evidencia la relación entre el Estado y la Iglesia, como se observó con el caso del aborto o las redadas a los bares *gays*. En este sentido, lo local y las fronteras internas y externas no son solo un espacio, sino también son un ordenamiento que permite distinguir y, al mismo tiempo, reforzar la diferencia bajo preceptos religiosos, matizados de manera secularizada que permiten, a la vez, su articulación.

Por otro lado, los movimientos sociales y su reconocimiento político también mostraron un reforzamiento y auge de grupos que, ya sean laicos o religiosos, se articulaban bajo principios encaminados a salvaguardar a un nosotros de la región que se consolidaba por medio de la familia. En este sentido, la familia se convirtió en uno de los referentes centrales de las distintas manifestaciones de la batalla cultural, ya que no solo reproducía a otros individuos, sino a todo un orden social y cultural (judeocristiano), que se veía en acecho.

El resguardo de un orden moral también redefine el aparato político-religioso-intelectual y es desde él que se afianza y apela a la batalla cultural en su sentido histórico. Por lo tanto, existe una visión partidista que conforma a la batalla cultural, ya que es uno de los medios por los cuales, legalmente, se instauro lo que se permite y lo que se criminaliza. Pero, concretamente, se instauran bajo una visión judeocristiana la cual guía sus códigos morales. En este sentido, la creación de partidos políticos, vinculados a las Iglesias, y su fuerza e influencia social, en distintos momentos, ha redefinido la apertura o retrocesos en torno a los derechos humanos que se contiendan. Así pues, la actual derecha, diversa y contradictoria, no se define solo como partidista, pero sí recurre al ámbito partidario para posicionarse en el terreno político.

Bibliografía

Anderson, Benedict (2021). *Comunidades imaginadas*. México: Fondo de Cultura Económica.

Balbuena, Raúl (2014). *Guys en el desierto. Paradojas de la manifestación pública en Mexicali*. México: Universidad Autónoma de Baja California.

Balibar, Étienne (2018). Raza y nacionalismo. En Immanuel Wallerstein y Étienne Balibar, *Raza, nación y clase. Las identidades ambiguas* (pp. 65-108). Madrid: Dirección Única.

Brown, Wendy (2020). *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente*. Madrid: Tinta Limón.

Castle, Jeremiah J. y Stepp, Kyla K. (2021). The “Culture Wars” go global: Three cases of religious conflict in foreign policy. *Orbis*, 65(4), 599-617. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2021.08.004>

Cuevas, Julieta (21 de julio de 1961). El poder femenino. *El Heraldo*.

Dehesa, Rafael (febrero de 2007). Global Communities and Hybrid Cultures: Early Gay and Lesbian Electoral Activism in Brazil and Mexico. *Latin American Research Review* 42(1), 29-51. <https://dx.doi.org/10.1353/lar.2007.0006>

El Heraldo (7 de enero de 1954). Una Comadrona Responsable se halla detenida.

El Heraldo (5 de mayo de 1962). Urge terminar con el criminal tráfico de obstetricia ilegal.

El Mexicano (11 de diciembre de 1991). ‘Operación centro’ Erradicará a ladrones del primer cuadro.

Felitti, Karina (enero de 2011). Estrategias de comunicación del activismo católico conservador frente al aborto y el matrimonio igualitario en la Argentina. *Sociedad y religión*, 21(34-35), 92-122.

García, Rutilio (2019). La estigmatización de la mujer en una época de la historia de Ciudad Juárez. 1920-1930. *Sociedades de paisajes áridos y semiáridos*, 3(5), 135-149.

Gómez Estrada, José A. (2019). Turismo, gobierno y ley seca en la frontera norte de México. Tijuana, Baja California, en el periodo 1920-1935. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, (57), 207-238. <https://doi.org/10.22201/iih.24485004e.2019.57.67741>

Hernández, Tania (2011). El Partido Acción Nacional y la democracia cristiana. *Perfiles Latinoamericanos*, 19(37), 113-138. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532011000100005

Hernández Vicencio, Tania (2019). Las derechas mexicanas en la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI. *Contemporánea*, (11), 31-47. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/contemporanea/article/view/15031>

Hernández Vicencio, Tania (2021). *Tras las huellas de la derecha: el Partido Acción Nacional, 1939-2000*. México: Fondo de Cultura Económica.

Hunter, Allen y Liévana, Armidia (1981). Entre bastidores: ideología y organización de la nueva derecha. *Revista Mexicana de Sociología*, (43), 1745-1780. [Número extraordinario].

Jaimes Martínez, Ramiro y Montalvo González, Alethia A. (2019). Neopentecostalismo difuso: movimientos evangélicos en Tijuana. *Estudios Sociológicos*, 37(109), 133-164. <https://doi.org/10.24201/es.2019v37n109.1433>

Lamas, Marta (marzo de 2009). La despenalización del aborto en México. *Nueva sociedad*, 220(1), 154-172.

Maier, Elizabeth (enero, 2010). El aborto y la disputa cultural contemporánea en México. *La aljaba*, (14), 11-30.

Pérez Rosales, Laura (2011). Censura y Control: La Campaña Nacional de Moralización en los años cincuenta. *Historia y grafía*, (37), 79-113.

Stoler, Ann Laura (julio de 2010). Archivos coloniales y el arte de gobernar. *Revista colombiana de antropología*, 46(2), 465-496.

Ubaldo Garcete, Norma (abril de 2003). Sobre aborto y políticas públicas. *Debate Feminista*, (27). https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/article/view/765/679

Vaggione, J. Marco (2012). La “cultura de la vida”: desplazamientos estratégicos del activismo católico conservador frente a los derechos sexuales y reproductivos. *Religião y Sociedade*, 32(2), 57-80. <https://doi.org/10.1590/S0100-85872012000200004>

Vaticano (2 de junio de 1972). Defensa de la moral humana. Pide el Papa. *El Heraldo*.

Veloz Contreras, Areli (2014). *La producción de feminidades en la ciudad: relaciones sociohistóricas y acciones políticas en Tijuana* [tesis doctoral]. Universidad Autónoma Metropolitana, México. <https://bindani.izt.uam.mx/concern/tesiuams/nc580m720>

Veloz Contreras, Areli (enero de 2017). Las contiendas por la ciudad: criminalización, muertes y organización política en torno a la diversidad sexual en Tijuana. *Culturales*, 5(1), 85-120.

Veloz Contreras, Areli (2019). *Las retóricas de la moralidad en la frontera. Análisis histórico de la sexualidad en Tijuana*. México: CECUT/CONACULTA.

Yuval-Davis, Nira (2004). *Género y nación*. Lima: Flora Tristán.